

GUINEA ECUATORIAL

Guinea Ecuatorial, con una población estimada entre los 540.000 y el 1.000.000 de habitantes, es de nombre una república constitucional multipartidista. Todas las ramas del gobierno están dominadas por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y su círculo interno, sobre todo del grupo étnico fang. La comunidad internacional juzgó las elecciones más recientes, del 2002 (presidenciales) y del 2004 (parlamentarias), de estar seriamente viciadas. Si bien en algunos casos, las autoridades civiles mantuvieron generalmente un eficaz control de las fuerzas de la seguridad, hubo casos en los cuales los elementos de las fuerzas de la seguridad actuaron independientemente de la autoridad del gobierno. El expediente de los derechos humanos del Gobierno de Guinea Ecuatorial sigue siendo pobre, y el gobierno sigue cometiendo y tolerando abusos graves.

Los siguientes problemas de derechos humanos fueron reportados: la reducción del derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno; la tortura, los apaleamientos, y otros abusos físicos a presos y detenidos por parte de las fuerzas de la seguridad; condiciones duras y potencialmente mortales en las cárceles; impunidad; arrestos, detenciones e incomunicaciones arbitrarias; acoso y deportación de residentes extranjeros; corrupción judicial y falta de debidas garantías; restricciones al derecho a la privacidad; graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa; restricciones a los derechos a la reunión, la asociación, y la libre circulación; corrupción gubernamental; violencia y discriminación contra las mujeres; tráfico de personas; discriminación contra las minorías étnicas; restricciones a los derechos de los trabajadores y trabajo infantil; y trabajo forzoso de menores.

Se reportaron progresos en algunas áreas. Se aprobó una ley que penaliza la tortura y los reportes de abusos de derechos humanos disminuyeron en comparación a años anteriores. Además, oficiales de la policía de nivel medio recibieron instrucción profesional, incluyendo la materia de los derechos humanos.

RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANO

Artículo 1, Respeto por la integridad de la persona, sin estar sometido a:

- a. Privación arbitraria o ilegal de la vida

Hubo ciertas evidencias de que el gobierno o sus agentes habrían cometido asesinatos arbitrarios o ilegales.

El día 4 de febrero, en las inmediaciones de Abidjan, Costa de Marfil, asaltantes desconocidos secuestraron y mataron Laesa Atanasio Bita Rope, líder del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB). Los miembros del MAIB declararon que agentes de la seguridad del gobierno marfileño colaboraron con oficiales del gobierno de Guinea Ecuatorial para matar a Bita Rope. Las autoridades marfileñas negaron su implicación y no se hizo ninguna detención.

Un convicto en la cárcel de Cogo, Jose Meviane Ngua, murió el 18 de agosto, y los funcionarios divulgaron la muerte como suicidio mediante ahorcamiento. Informes no documentados que aparecieron en páginas webs extranjeras informaron que el cuerpo de Jose Meviane Ngua presentaba hematomas (contusiones inflamadas), causadas ya sea por el ahorcamiento o posible por estrangulamiento y golpes recibidos en la espalda. Se reportó que un grupo de policías investigó al respecto, pero los resultados de la investigación no fueron difundidos, y no se tiene información alguna de que se hayan tomado medidas contra los gendarmes implicados.

Durante abril y mayo las autoridades encontraron por lo menos seis cuerpos mutilados en el área de Malabo; las matanzas fueron atribuidas a un grupo llamado los Plateados. Los cuerpos mostraban señales de haber sido víctimas de prácticas rituales. El día 25 de mayo, las fuerzas de la seguridad arrestaron a aproximadamente 20 personas, incluyendo algunos miembros de las fuerzas de la seguridad, según se informa entre los detenido estaba el hermano del anterior embajador de Guinea Ecuatorial en España, Jose Ela Ebang. En noviembre el juicio de esos

arrestados comenzó en un tribunal militar, pero a finales del año el gobierno no había anunciado todavía ningún veredicto.

La oposición en exilio continuó acusando al gobierno de intentos de asesinatos. Los abogados españoles de los individuos acusados del intento de asesinato de Manuel Moto Tomo, hermano del activista exiliado German Pedro Tomo Mangué, de Fuerza Demócrata Republicana (FDR), en Madrid, junio de 2005, indicaron que la motivación era comercial, no política, pero algunos activistas del FDR creyeron que Mangué era el objetivo perseguido.

Un soldado condenado por homicidio negligente en la muerte de una cooperante española en una barrera en el 2003 estaba en el grupo de los indultados por el Presidente Obiang en Junio (supuestamente por error, pero quizás por la influencia de la familia).

b. Desaparición

No hubo informes de nuevos secuestros por razones políticas durante el año.

No ha habido progresos acerca de los secuestros a principios del 2005 de Juan Ondo Abaga, Florencio Ela Bibang, Antimo Edu Nchama, y Felipe Esono Ntutumu. Se informó que fueron repatriados forzosamente desde Benin y Nigeria, encarcelados en Black-Beach, torturados severamente, y no se les concedió un abogado, fueron mantenidos incomunicados y sin el conocimiento de la familia. El gobierno no ha reconocido oficialmente su presencia, y cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitaron la prisión de Black Beach, estos prisioneros fueron, según se informa, desplazados a otras localizaciones para que los representantes no pudieran verlos o hablar con ellos.

c. Torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

El día 2 de noviembre, una ley que penaliza la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, entró en vigor, conforme a las obligaciones del Gobierno como parte de la convención de la O.N.U contra la tortura. La ley fue

publicada, y las sesiones de "sensibilización" dirigidas a las fuerzas de seguridad comenzaron en noviembre.

Sin embargo, durante el año la tortura y el trato cruel continuaron en las cárceles y prisiones del país. Los apaleamientos y las amenazas con las armas cargadas son las modalidades mas frecuentemente divulgadas. Además del incidente en Cogo (véase la sección 1.a.), hubo numerosos informes de que las fuerzas de la seguridad apalearon a activistas del partido de la oposición, a menudo a las órdenes de los funcionarios locales, que, al parecer, contaban con el apoyo de niveles muy altos para actuar con impunidad.

El día 5 de octubre en Bata, la policía arrestó a Florencio Ondo, Jose Antonio Mguema, Filemon Ondo, y Bacilio Meye, vinculados al ilegalizado Partido del Progreso Popular (PP). Gobiernos extranjeros y la organización no gubernamental (ong) Amnistía Internacional (AI) apelaron al gobierno en su favor. Los cuatro fueron liberados mas de un mes más tarde después de ser apaleados, privados de alimento y agua por varios días, y de sufrir amenazas por sus vidas si no confesaban asociación ilegal y posesión de documentos "peligrosos para el estado" (e-mails, folletos, y cuadros del líder del PP Severo Moto). No confesaron y las acusaciones fueron condicionalmente retiradas. Las posesiones incautadas por la policía nunca fueron devueltas.

Extranjeros, sobre todo del África Occidental, continuaron sufriendo acoso, intimidación y detención arbitraria. Debido a la corrupción del gobierno y la preocupación por potenciales mercenarios, obtener la autorización de residencia y el permiso de trabajo era difícil, consumía mucho tiempo y muchos recursos económicos. La policía atacó periódicamente barriadas de inmigrantes y utilizo excesivamente la fuerza, incluyendo palizas. También fueron saqueadas propiedades, se instalaron barreras para exigir documentos y se visitaron viviendas para exigir documentos de identidad y de residencia. Algunos juzgaron esas medidas como tentativas de extorsión.

Ninguna de las personas responsables de torturas extensamente reportadas en años anteriores o durante el período que abarca este informe fue juzgado. En septiembre del 2005 AI informó que la práctica de la tortura era generalizada en los centros de detención. En el año 2004

altos miembros del gobierno dijeron a diplomáticos extranjeros que los derechos humanos no conciernen a los criminales y declararon que la tortura de conocidos criminales no era una violación de los derechos humanos. Los miembros del gobierno en plaza sostienen que quienquiera que hiciera esta afirmación no representaba la política del gobierno.

Los presos surafricanos condenados por un intento de golpe de estado en el 2004 seguían siendo forzados a llevar grilletes en los tobillos 24 horas al día, se les restringían movimientos simples tales como bañarse. Informaron que no se les permitía apelar a sus convicciones o leer cartas provenientes de sus familiares. Como parte de los indultos del presidente por motivo de su cumpleaños en junio, un surafricano fue liberado y entregado para recibir atención médica crítica después de que las autoridades locales hubieran rechazado durante meses reconocer la gravedad de su estado.

En mayo del 2005, la policía atacó a 15 miembros del partido de la oposición Convergencia Para la Democracia Social (CPDS) en el aeropuerto de Malabo, causando daños substanciales a varios, y desnudando violentamente a algunas chicas en público. Como mínimo, 10 personas fueron detenidas, incluyendo uno que sufrió lesiones severas y que no recibió atención médica alguna; fueron liberados una semana más tarde.

En septiembre del 2005, según se informó, las autoridades torturaron a aproximadamente 70 personas acusadas de delitos relacionados con un supuesto intento de golpe en octubre de 2004, antes y durante su secreto juicio militar. El grupo consistía en oficiales y familiares del supuesto líder militar del intento de golpe, Teniente Coronel Cipriano Nguema Mba. Todos los implicados excepto dos relataron haber sido torturados y algunos lucían marcas visibles de los abusos. AI divulgó que las autoridades extrajeron declaraciones usando la tortura durante la detención en aislamiento fueron usadas como evidencias (véase la sección 1.d.). Los supuestos organizadores del intento de golpe seguían encarcelados a finales del año.

No se tomó ninguna acción contra los responsables en el 2004 de los siguientes casos: la tortura de cinco personas arrestadas en la isla de Corisco; los disparos al líder del PP Marcelino Manuel Nguema Esono; la tortura de Weja

Chicampo; y la tortura del teniente coronel Maximiliano Owono Nguema. Marcelino Esono fue liberado en la amnistía de junio. Maximiliano Nguema (alias Maximo Ovono Nguema) seguía encarcelado a finales del año.

Condiciones en las cárceles y en los centros de detención

Las condiciones de muchas cárceles y prisiones del país siguieron siendo duras y peligrosas para la vida; a los reclusos no se les proporcionaba con frecuencia suficiente alimento, agua potable, o habitaciones limpias. Durante el año, sin embargo, los reclusos de la prisión de Black Beach ocuparon las nuevas instalaciones que, según se informó, se aproximan a los estándares internacionales aceptables. Una prisión nueva se está construyendo en Bata. La formación de los guardias de prisión seguía siendo deficiente.

Hubo informes creíbles de que las autoridades de la cárcel y de la prisión torturaron a presos (véase la sección 1.c.).

A menudo, la atención médica era negada o no disponible para los presos con gangrena, huesos rotos, infecciones, y enfermedades potencialmente fatales pero curables. Algunos presos recibieron tratamiento médico, pero éste fue irregular e irrisorio. Los presos que necesitaban la medicación casi nunca la recibieron, a menos que los miembros de la familia tuvieran conexiones, o sus casos fueran objeto de atención internacional. La rehabilitación era inexistente. En diciembre los diplomáticos se interesaron por la salud del preso Donato Ondo Ondo, del que informaron AI y ciudadanos guineanos en el exilio que se encontraba muy enfermo; el gobierno no proporcionó ninguna respuesta.

En abril del 2005 AI acusó que los funcionarios de Black Beach habían dejado de proveer comida y bloqueado todo contacto con familiares, abogados y funcionarios consulares a, por los menos, 70 reclusos, y que las vidas de estos estaban amenazadas por el hambre y la tortura. AI divulgó también que todos los presos eran mantenidos 24 horas al día en sus celdas. No se permitió a los presos con frecuencia comunicarse con los abogados o los parientes. No obstante, los diplomáticos extranjeros que visitaron la instalaciones de dicha prisión en la segunda mitad del 2005, encontraron mejoras con respecto al contacto con las

visitas provenientes de fuera de la prisión, permiso para que los presos pudieran pasar fuera de las celdas la mayor parte del día, reducción de los casos de tortura reportados, y la provisión de un mínimo de alimento. Aun así, las familias siguieron siendo la fuente principal del alimento de los reclusos.

Presos masculinos y femeninos no fueron mantenidos en instalaciones separadas. A diferencia de años anteriores, no hubo informes de que las autoridades de la prisión y presos masculinos hubieran asaltado sexualmente a presos femeninos, ni hubo informes creíbles de que una cuadrilla de policía violó a presos femeninos en Malabo.

Presos adultos y menores de edad no fueron mantenidos en instalaciones separadas. Según la información disponible, generalmente no enviaron a los menores a las prisiones durante el año, lo que es un reconocimiento de que no podrían ser protegidos adecuadamente. Al contrario, los mantuvieron en cárceles locales, les observaron y los liberaron con advertencias.

A diferencia de años anteriores, no se recibió ningún informe de que se utilizaron habitualmente presos como trabajadores en los proyectos de construcción de algunos funcionarios, sin salario u otro tipo remuneración, ni que los jueces utilizaran a los presos como trabajadores domésticos.

Las prisiones estaban bajo mando militar, aunque el Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias era legalmente responsable de ellas. El personal militar de las prisiones no tenía ninguna formación especializada.

El gobierno permitió una limitada inspección independiente de las condiciones carcelarias. Había tres prisiones y aproximadamente 12 cárceles y celdas de retención en localidades mas pequeñas. El Comité Internacional de la Cruz Roja fue autorizado a hacer visitas periódicas a todas las cárceles y prisiones, y a reunirse privado con los presos. Las visitas del CICR durante el año fueron conducidas según los procedimientos estándar del CICR. No obstante, antiguos presos y parientes informaron de que varios presos políticos no aparecían en las listas de las prisiones, que les habían encarcelado sin audiencias previas, y que se evitó que los representantes del CICR les

vieran (véase la sección 1.b.). Estos presos incluían, entre otros, a Florencio Ela Bibang, Antimo Edu Nchama, Felipe Esono Ntutumu y Juan Ondo Abaha. El gobierno también rechazó las peticiones de una misión diplomática de reanudar las visitas a la prisión.

El programa de desarrollo de la O.N.U (PNUD) y la Comisión Nacional en los Derechos Humanos (CNDH) concluyeron, después de cortas visitas a lo largo del año, que encontraron mejoras significativas en las cárceles y prisiones, particularmente en la infame Black Beach que ocupaba ya un edificio nuevo. No obstante, el CNDH es un órgano controlado por el gobierno, no independiente, y no investiga ni reporta violaciones de derechos humanos.

d. Detención o arrestos arbitrarios

La ley prohíbe la detención y el arresto arbitrario, pero el gobierno no implementó el respeto de estas prohibiciones. Había garantías procesales nominales para la protección de los derechos de los ciudadanos, incluidas las disposiciones relacionadas con la detención y el requisito de órdenes de allanamiento; sin embargo, las fuerzas de la seguridad sistemáticamente hicieron caso omiso de estas garantías y continuaron arrestando y deteniendo a personas arbitrariamente y con impunidad. Las fuerzas de la seguridad a menudo detienen a individuos sin más formalidad que "por orden de la superioridad". Muchas veces los cargos eran archivados únicamente tras la intervención de la comunidad internacional, y los activistas políticos seguían siendo, con frecuencia, mantenidos en prisión preventiva, lo que significaba que sus casos estaban indefinidamente bajo investigación. Las acciones de miembros del gobierno y socios suyos en los negocios en los que estaban metidos disfrutaron de una total impunidad.

El papel del policía y del aparato de la seguridad

La policía es responsable de la seguridad en los centros urbanos y la gendarmería lo es de las áreas del extrarradio, estando a cargo también de acontecimientos especiales. La policía y la gendarmería son los órganos que, bajo el mando del ministro civil de la seguridad nacional, están a cargo de la seguridad pública. La delimitación de las responsabilidades del ministerio de la seguridad nacional, de dos años de antigüedad, y el ministerio de defensa sigue sin ser muy clara.

Anteriormente, tanto la seguridad interna como la seguridad externa caían bajo la responsabilidad de los militares.

La impunidad de la que disfrutaban policías y gendarmes fue un serio problema. No había mecanismos conocidos para investigar cargos de abuso. Los otros ministerios y funcionarios locales hacían un uso indebido de la policía, acosando y amenazando a particulares y confiscando propiedades.

La corrupción era endémica dentro de las fuerzas de la seguridad. Los oficiales que extorsionaban dinero a los ciudadanos no eran sancionados.

A diferencia de en años anteriores, no hubo informes de que se autorizara a ciudadanos regulares, no miembros de las fuerzas de seguridad, a arrestar a personas, aumentando así la frecuencia de las detenciones arbitrarias, sospechosas de ser residentes ilegales.

El gobierno reconoció la necesidad de la mejora profesional de la policía y financió formación correctiva. Una compañía privada extranjera contratada por el gobierno formó a un primer grupo de oficiales de rango intermedio en temas que tienen que ver su profesión, incluyendo los derechos humanos de los ciudadanos, con especial atención en los de los detenidos.

Arrestos y detenciones

Muchas personas fueron arrestadas a una simple orden verbal de un oficial. Las órdenes de detención no son requeridas. En un plazo de 72 horas, exceptuando fines de semana y días festivos, el detenido tiene el derecho a la determinación judicial de la legalidad de la detención; sin embargo, en la práctica la duración de estas detenciones era generalmente mucho más larga, llegando hasta incluso a años. Aunque la posibilidad de salir bajo fianza existe y así mismo los abogados defensores de oficio, si uno lo solicita, el público desconoce estos derechos y, por regla general, en la práctica no funcionan. El porcentaje de esos encarcelados detenidos antes del juicio se estima que está en torno al 80%. Por lo general, cuando un caso de encarcelamiento sin previo juicio llegaba al conocimiento de altas autoridades, se tomaba alguna acción. Los retrasos de los juicios eran causados también por culpa de unos

procedimientos judiciales ineficaces, corrupción, falta de seguimiento y restricciones del personal.

Los abogados defensores no recibían una lista completa de las acusaciones a las que se enfrentaban sus clientes. Los detenidos no eran puntualmente informados de los cargos que pesaban sobre ellos. El acceso legal dependía de la naturaleza del crimen cometido y de los sobornos. Algunas visitas limitadas de miembros de la familia fueron permitidas en todas las cárceles y prisiones.

A diferencia de años anteriores, la policía no mantuvo incomunicados de forma rutinaria a los presos, aunque sí que hubo casos de detenidos incomunicados, sobre todo de presos políticos (véase la sección 1.c.). Los archivos de los detenidos disponibles en las prisiones no eran de fiar. No se mantenían archivos fiables de los detenidos.

En el 2005 el gobierno respondió a las preguntas sobre el estado de 39 personas que habían sido detenidas por "crímenes contra el estado." Muchos de ellos habían permanecido meses o años sin que sus casos fueran llevados a juicio. Diecisiete de ellos fueron llevados ante un juez en diciembre del 2005 para, tras breves audiencias, permanecer en la prisión por unos, sin especificar, "crímenes contra el estado", rebelión o terrorismo, y mantenidos por mandato en estado de "detención preventiva" hasta el juicio. En al menos otros tres casos, la fiscalía general del estado invalidó una sentencia firme de un juicio por razones explicables. El gobierno afirmó no disponer de información sobre 20 personas de las que numerosas fuentes aseguraban que permanecían en prisión.

El gobierno utilizó los arrestos, los apaleamientos, y varias formas de hostigamiento para intimidar dirigentes y miembros del partido de la oposición.

La detención arbitraria era un problema serio. Las autoridades locales hostigaban y deportaban de forma arbitraria a la gente extranjero (véase la sección 1.c.). Las fuerzas de seguridad detenían a parientes de presos y criminales sospechosos para forzar a estos a cooperar (véase la sección 1.f.).

AI y otros observadores notificaron que el juicio secreto celebrado en septiembre del 2005 a, aproximadamente, 70 oficiales militares, antiguos oficiales militares y

parientes del líder del supuesto intento del golpe de Octubre del 2004, no se ajustó a las normas jurídicas internacionales de juicios justos. Una corte militar condenó a 22 hombres y una mujer a penas muy largas de prisión. Como mínimo, seis personas fueron juzgadas sin que estuvieran presentes, lo que contraviene el derecho nacional de Guinea Ecuatorial. En todos los casos los abogados defensores no tuvieron acceso a las pruebas de las que disponía el gobierno y sólo disponían de las declaraciones de sus clientes. La corte negó las peticiones de los abogados de defensa de interrogar a los inculpadores. Los condenados no tuvieron el derecho a apelar. Durante el juicio, la corte ignoró todas las alegaciones y evidencias de que los procesados habían sido torturados y no se llevó a cabo ninguna investigación al respecto (véase la sección 1.c.).

Nueve personas fueron condenadas, incluyendo a las que estaban ausentes, a penas de 30 años de prisión por cargos de socavar la seguridad del estado y de intentar derrocar al gobierno. La corte condenó a otras 11 personas, incluyendo Florencia Nchama Mba, por los mismos cargos que los anteriores, como cómplices, a la pena de 21 años de encarcelamiento. La corte condenó a Francisco Mba Mendama (también condenado por socavar la seguridad del estado a una pena de 30 años de prisión) y a otras dos por traición a una pena de 25 años de prisión. Una persona recibió una condena de 12 años de prisión. Las declaraciones obtenidas bajo tortura y mientras permanecían incomunicados fueron utilizadas como evidencia contra los condenados.

Amnistía

Durante su cumpleaños en junio, el Presidente Obiang concedió un indulto condicional a los menores, las mujeres y a, aproximadamente, otras 40 personas. Muchos de los indultados --por lo menos 12, pero posiblemente 32 -- habían sido detenidos pero nunca procesados, por los "crímenes contra el estado"; eran generalmente presos de conciencia. Weja Chicampo, antiguo dirigente del MAIB, fue uno de los casos más reseñables. Chicampo fue liberado pero forzado inmediatamente a exiliarse a Madrid, no pudo ni informar a su familia.

Justo antes de la visita oficial del Presidente Obiang a España en noviembre, los cuatro del ilegalizado partido PP

detenidos en octubre fueron puestos en libertad condicional (véase la sección 1.c.).

e. Denegación de un juicio público imparcial.

La constitución y la ley prevén un poder judicial independiente; sin embargo, en la práctica, el gobierno no respeta esta disposición. Todas las ramas de poder están dominadas por el ejecutivo. Los jueces sirven a gusto del presidente, que los nombra, transfiere y despide ya sea por razones políticas o por capacidad. La corrupción judicial era generalizada.

Como parte del esfuerzo de reforma judicial en curso, durante el año el gobierno, por primera vez en su historia, codificó las leyes y las divulgó.

El sistema judicial nacional se compone de cortes provinciales, de dos cortes de apelación, de un tribunal militar, y del Tribunal Supremo. El presidente designa a los miembros del Tribunal Supremo, estos, según se informa, recibe instrucciones de él. Un general, no graduado en leyes, asesoró al Tribunal Supremo en casos relacionados con los militares. El Consejo Superior del Poder Judicial nombra y controla a los jueces.

El Presidente Obiang es el Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y su vice-presidente es el presidente de la corte suprema de justicia. A finales del 2004 el presidente de la Corte Suprema instauró un sistema y un programa obligatorios formación para ir sustituyendo a los jueces incompetentes. De aproximadamente 60 jueces, se estima que solamente 12 estaban graduados en leyes.

Procedimientos Judiciales

Muchos juicios por crímenes ordinarios son públicos, pero no utilizan jurados. La ley se basa en el sistema español colonial. Los demandados tienen el derecho a estar presentes durante sus juicios pero raramente se les permite consultar puntualmente con los abogados. Si el acusado no puede permitirse a su propio abogado, tiene el derecho a pedir uno de oficio designado por el gobierno; desafortunadamente, a los acusados no se les informa a menudo de este derecho. Los demandados pueden interrogar directamente a los testigos, y pueden presentar sus propios testigos y pruebas, aunque en la práctica este recurso se utiliza muy poco. Existe un acceso limitado a las pruebas.

Por ley, el acusado disfruta de la presunción de inocencia y el derecho a apelar; sin embargo, el recurso legal de la apelación se permite muy poco en la práctica. Por ley, los derechos antes mencionados son extensibles a todas las personas. La experiencia en la defensa es limitada, y fue divulgado que los abogados defensores no representan necesariamente los deseos de la persona que es defendida.

El código de Justicia Militar dice que aquel que desobedece a una autoridad militar, o comete un acto considerado "crimen contra el estado," será juzgado por un tribunal militar, sin las debidas diligencias o garantías procesales, dando igual si el acusado es militar o civil. Algunos casos militares eran esencialmente de naturaleza política. Un demandado puede ser juzgado sin que este presente, y la defensa no tiene asegurada el derecho de interrogar a los acusadores. Los juicios militares no son públicos.

Los jefes de consejos de poblado juzgaron casos civiles y materias criminales de menor importancia en las cortes tradicionales de los poblados.

Presos políticos

Aproximadamente 60 "presos de conciencia," o presos políticos, identificados permanecían en las prisiones a finales del año, muchos de ellos sin apenas haber sido juzgados; otros habían sido condenados por "crímenes contra el estado" sin una defensa adecuada y sin posibilidad de apelación (véase la sección 1.c.). Todos estos presos eran miembros de partidos de la oposición o personas acusadas por el gobierno de haber participado en intentos de golpe de estado. El CICR y algunos diplomáticos extranjeros los visitaron durante el 2005, pero en 2006 las visitas individuales fueron autorizadas solamente para el CICR.

Miembros importantes de la oposición ilegal, Fuerza Demócrata República (FDR), PP, y NPU, permanecían prisioneros en la cárcel Black Beach por sus actividades políticas. Se informó que Felipe Ondo Obiang, líder del FDR, detenido en marzo por un supuesto golpe de estado, era torturado y permanecía en la cárcel de Evinayong a finales del año. Estuvo encadenado, con grilletes en la pierna, a la pared y se le mantuvo en aislamiento durante varios meses. Seis de los otros 30 presos condenados junto a Ondo Obiang, fueron liberados durante el indulto del presidente

en junio. El líder Guillermo Nguema Ela, de FDR, permanecía en la prisión, a pesar de habersele concedido una amnistía parcial. El gobierno limitó el acceso a los presos políticos al ICRC, a las esposas y, ocasionalmente, a los abogados.

En el 2004, la policía arrestó al capitán Felipe Obama de la fuerza aérea. No había informes de que se hubieran presentado cargos contra él ni de que hubiera sido liberado.

Con respecto a la detención llevada cabo en noviembre del 2004 de 50 oficiales militares, CPDS afirmó que el gobierno había arrestado a otras 100 personas más. Parece ser que estos eran los mismos individuos juzgados secretamente por un tribunal militar en el 2005. Todos recibieron largas condenas y no tuvieron acceso a un abogado defensor.

Procedimientos y remedios judiciales civiles

Los casos pueden ser resueltos fuera de las cortes pero no hay procedimiento de arbitraje o mediación conocido oficialmente. Los litigios civiles raramente eran llevados a juicio, aparentemente por la falta de confianza en la existencia de juicios justos y la poca transparencia.

Reposición de la propiedad

La ley prevé la reposición o la remuneración en caso de desposesión de una propiedad privada pero, en la práctica, gente forzada a abandonar sus viviendas o sus terrenos raramente eran compensados adecuadamente. La ley del patrimonio del estado, ley del código civil del suelo, indica que porque toda la tierra pertenece en última instancia al estado, el gobierno puede desposeer a los ciudadanos cuando determina que es por el "interés del estado". Los individuos pueden disponer de títulos de propiedad de la tierra, pero en última instancia el estado es el dueño.

Durante el año el gobierno desmanteló varias áreas residenciales, aparentemente en el interés de la renovación urbana; sin embargo, según se informó, miembros del gobierno tenían intereses financieros personales en la reconstrucción de dichas áreas. Según AI, los funcionarios afirmaban, a menudo, que la tierra expropiada iba a ser

destinada a utilidad pública pero no se utilizaba para ese propósito; en su lugar, la tierra fue usurpada por el presidente, su familia y otros miembros del gobierno para construir viviendas de lujo, supermercados u otros negocios para sí mismos.

Se estaban construyendo nuevos complejos residenciales pero no se beneficiaron los pobres de ellos. Altos miembros del gobierno y sus parientes compraron, según se informa, las nuevas viviendas sociales terminadas en "Bata 2" (un suburbio de Bata).

Según AI, en general el gobierno no consultó con las comunidades afectadas, ofreció muy poca y no relevante información, y prohibió el derecho a impugnar los desahucios. Centenares de hogares y de negocios fueron destruidos; muchas eran estructuras sólidas en barrios bien establecidos, y los residentes no tenían ningún otro lugar al que ir y ningún dinero para volver a construir otros inmuebles. Por ejemplo, más de 600 personas se quedaron sin hogar en barrio Atepa de Malabo el 22 de julio cuando el gobierno destruyó sus hogares sin previo aviso. Al día siguiente fueron demolidas otras viviendas en el barrio Camaremy de Malabo. En ambos casos, los soldados empujaron, abofetearon e intimidaron a los residentes que osaron protestar.

El gobierno algunas veces ha ofrecido indemnizaciones parciales a los que fueron capaces de presentar un título de propiedad o los gastos en los que habían incurrido durante la compra o la construcción. En muchos casos no existían títulos escritos aunque la tierra en cuestión hubiera sido propiedad de la familia afectada durante generaciones.

f. Injerencia arbitraria en la vida privada, la familia, el hogar o la correspondencia.

La constitución y la ley prohíben tales acciones, pero, en la práctica, el gobierno no respeta estas prohibiciones. Las fuerzas de la seguridad allanaron moradas y arrestaron disidentes sospechosos, criminales, residentes extranjeros, y otros, a menudo sin órdenes judiciales, y confiscaron sus propiedades con impunidad. Una vez liberados, a los presos nunca se les devolvieron sus propiedades. Se intimidó a los

familiares, a veces se llegó hasta detenerlos o desahuciarlos. Después de su liberación, las personas arrestadas no tuvieron forma alguna para recuperar sus propiedades y, muchas veces, para estas personas fue imposible encontrar un empleo, se dice a instancias de miembros de la familia del presidente.

Los informantes siguieron los pasos de miembros de la oposición, ONGs, periodistas y diplomáticos extranjeros. La mayoría de los residentes y periodistas creían que las llamadas telefónicas y el acceso a Internet estaban pinchados (véase la sección 2.a.).

Las fuerzas de la seguridad detuvieron a parientes de presos y a sospechosos de haber cometido algún crimen para forzar a los presos o a los sospechosos a cooperar (véase la sección 1.c.).

El gobierno presionaba a los funcionarios a afiliarse al gubernamental Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE). Se informó que, siendo miembros o no, a todos los funcionarios se le deducía un concepto de sus salarios para financiar al PDGE. Los miembros de la oposición eran discriminados en el acceso al empleo, a las becas y tenían problemas para mantener sus puestos. Si se descubría que un negocio había contratado a alguien de la lista negra, este tenía que ser despedido o el negocio tendría que hacer frente a una amenaza de cierre (véase la sección 3).

Residentes extranjeros, principalmente del África Occidental, eran acosados, arrestados y deportados y se les saqueaban sus bienes (véase la sección 1.c.).

Artículo 2, Respeto por libertades civiles, incluyendo:

a. Libertad de expresión y de prensa.

La constitución y la ley prevén la libertad de expresión y de la prensa; sin embargo, el gobierno restringe severamente estos derechos. Durante el año el gobierno vigiló a periodistas; los medios de comunicación seguían estando firmemente bajo el control del gobierno; y los periodistas practicaron la auto-censura.

Las críticas al presidente, a su familia y a las fuerzas de la seguridad eran considerada "ataques contra la nación."

Recientemente, algunos funcionarios comenzaron a discutir problemas sociales - corrupción gubernamental, tráfico de menores, revueltas de estudiantes, alcoholismo, ausencia de los profesores, los ingresos del gobierno, y demandas para la transparencia en la administración pública; sin embargo, solamente los mensajes aprobados por el gobierno sobre estos temas eran difundidos. Los ciudadanos creyeron que si llamaban a esos programas inusuales y criticaban al gobierno, las fuerzas de la seguridad los encontrarían y exigirían un soborno a cambio de no detenerles por "crímenes contra el estado."

Pese a lo anterior los ciudadanos informaron que, comparado a las últimas décadas, se podía hablar más libremente de los problemas de la sociedad.

La ley autoriza la censura del gobierno de todas las publicaciones.

Siete periódicos con grados diferentes de implicación gubernamental eran publicados irregularmente (Ebano, África Bantu, El Correo, La Opinión, Realite, Horizontes, Ecos de Mongomo), y también una publicación mensual, La Gaceta. Todos practican la auto-censura. La prensa internacional o revistas de información no podían venderse o distribuirse sin el permiso del gobierno. Las publicaciones políticas del partido de la oposición no se podían distribuir al público en general. No existían kioscos de noticias, y las únicas librerías eran las de las congregaciones religiosas. La creación de una nueva publicación se regía por una ley muy complicada y ambigua.

Los periodistas locales sospechaban los unos de los otros de ser informadores del gobierno. La asociación de la prensa (ASOPGE) y una misión diplomática planearon traer a un periodista internacional para organizar un seminario en julio; sin embargo, miembros del gobierno negaron el permiso porque el gobierno no había estado implicado directamente en el planeamiento. El programa finalmente fue permitido, y el gobierno envió un representante.

Los medios internacionales no intentaron operar en el país; solamente una agencia de noticias internacional tenía un representante regular presente en el país. A diferencia del pasado, no había casos conocidos de periodistas extranjeros deportados o acosados directamente durante el año, aunque algunos fueron seguidos e intimidados.

El gobierno imposibilitaba generalmente el acceso a las instalaciones domésticas de la difusión de partidos de la oposición y raramente no se refería a la oposición en términos no negativos en la difusión de las noticias.

En la radio y la televisión no se analizaban las cuestiones ni se expresaban puntos de vista diferentes. La emisión de las sesiones parlamentarias, anteriormente en directo, se censuraba antes de ser emitida. El primer periodo de la sesiones era emitido de forma demorada (con omisiones), y el segundo periodo apenas tenía cobertura selectiva y grabada. El primogénito del presidente era el propietario del único medio de comunicación privado.

Medios de comunicación electrónicos internacionales se podían captar e incluían Radio Francia, que emitía desde Malabo, y la Radio Exterior, el servicio internacional de onda corta de España.

Los medios de comunicación vía satélite aumentaban su disponibilidad. Canales extranjeros de información eran transmitidos y no se censuraban.

Pese a ser demasiado costosa para el ciudadano medio, la televisión vía satélite o por cable se expandía enormemente. La televisión Asonga, propiedad del hijo del Presidente, era difundida únicamente en Bata. La televisión por cable extranjera y ofrecía noticias en francés, español e inglés. El canal español, TVE Internacional, tenía una gran audiencia en el país. Tras la difusión de un documental clandestinamente filmada, *El Mundo a Cada Rato*, en el que se mostraba a un bebe que moría en los brazos de la madre en un hospital público de Malabo, el primer ministro visitó, según se informó, el hospital, criticó actitudes no profesionales y forzó algunos cambios de procedimiento en el hospital.

Libertad de Internet

No había restricciones del gobierno en el acceso al Internet o informes fiables de que el gobierno tuviera pinchados los correos electrónicos o los chat de Internet. Los residentes, sin embargo, creían que el gobierno tenía pinchado el acceso a Internet, incluyendo los correos electrónicos, a través de la compañía paraestatal telefonía

o de la conexión inalámbrica (véase la sección 1.f.). Los usuarios del correo electrónico, por lo tanto, practicaron la auto-censura. La mayoría de la crítica contra el gobierno vino de la comunidad de guineanos en el exilio, y el Internet había substituido a los medios de comunicación ordinarios como el primer canal en el que los puntos de vista de la oposición eran expresados y diseminados. Las paginas webs de ciudadanos en el exilio no fueron bloqueadas. El uso del Internet creció, pero el coste era prohibitivo para la mayoría de los ciudadanos. Algunas áreas alejadas incluyendo las islas mas pequeñas todavía carecían de servicio telefónico, por tanto el uso de Internet era limitado.

Libertad de cátedra y acontecimientos culturales

No hubo restricciones oficiales a la libertad académica o a acontecimientos culturales; sin embargo, en los últimos años, algunos profesionales cualificados habían sido despedidos de posiciones de enseñanza debido a su afiliación política o por los informes al gobierno de personas que habían asistido a sus clases. Por lo tanto, la mayoría de los profesores practicaron la auto-censura. De forma poco frecuente ocurrieron eventos culturales, y todos requirieron la aprobación del ministerio de la información, cultura, y turismo.

b. Libertad de reunión y de asociación pacífica

Libertad de reunión

La constitución y la ley prevén el derecho de reunión; sin embargo, el gobierno restringe este derecho. Reuniones privadas de más de 10 personas en una casa precisan de la autorización del gobierno. Aunque el gobierno suprimió formalmente los requisitos del permiso para las reuniones políticas del partido dentro de edificios del partido, se esperaba que en la práctica los partidos de la oposición informaran a autoridades si deseaban llevar a cabo reuniones de cualquier naturaleza, sin importar la localización. Los agentes de la seguridad vigilaron generalmente las reuniones en lugares públicos. El gobierno requería ser notificado por acontecimientos públicos tales como reuniones o marchas.

El día 12 de octubre, las fuerzas de la seguridad arrestaron a tres líderes del partido Convergencia Para la Democracia Social (CPDS), un partido legal, que se preparaban para celebrar una reunión en su oficina en Acurenam. Fueron liberados algunas horas más adelante, pero se les prohibió celebrar el día nacional dentro de las oficinas de CPDS.

Otros incidentes de detención y de apaleamientos ocurrieron durante el año, cuando los activistas políticos intentaron reunirse o viajar a otros distritos, aunque hubieran notificado a los miembros del gobierno con previa antelación. Los ejemplos incluyen la detención de una docena de activistas del CPDS el día 8 de abril, en Rebola, cuando intentaron convocar una reunión aprobada por partido. Carlos Ona Boriesa y Carmelo Iridi, miembros del comité ejecutivo del CPDS, recibieron 50 porrazos durante su detención. Los dos fueron transferidos al campo militar de Baney mientras los otros miembros del CPDS fueron liberados varias horas más tarde. Ambos fueron liberados más adelante y llevados de vuelta a Rebola. Se informó que una alta autoridad intervino. El 9 de abril, la policía interrumpió una reunión de CPDS en Ebebiyin, después de que Florentino Enama Edu fuera instruido por el gobierno de parar la reunión y expulsar a los miembros de CPDS de la ciudad.

Cuando diplomáticos extranjeros o dirigentes del CPDS reclamaron la atención del Presidente sobre tales hechos, él alegó no estar al corriente de tales incidentes y aseveró que pediría el cese de tales incidentes de represión. La oposición, sin embargo, cree que tales incidentes no pueden ocurrir si el presidente no las apoyase.

El CPDS pudo llevar a cabo su programa cívico anual de educación para la juventud del partido sin ser hostigado de forma notoria, y el Partido Acción Popular de Guinea Ecuatorial (APGE) celebró a su convención sin problemas.

En junio la fundación Olof Palme intentó llevar a cabo una conferencia sobre paz y democracia conjuntamente con el partido de la oposición CPDS. El gobierno rechazó el permiso y negó visas, según se informa porque no estuvo implicado en el planeamiento y a cargo de contenido. Unos meses más adelante un gobierno extranjero invitó al gobierno para que fuera co-organizador de un seminario (con

la misma fundación) cambiando la fecha. El esquema original incluía la participación de la oposición, además de oficiales del gobierno de alto nivel, como miembros del jurado. El gobierno insistió, según se informa, en que ninguno de los miembros de CPDS fuera ponente. Los organizadores sucumbieron a la presión del gobierno, y la conferencia finalmente se llevó a cabo en diciembre.

Libertad de asociación

La constitución y la ley prevén la libertad de asociación, pero el gobierno restringe este derecho en la práctica. La ley establece qué tipos de ONGs pueden registrarse, y las asociaciones de derechos humanos fueron añadidas a esta lista en enero de 2005; sin embargo, ninguna asociación de derechos humanos ha intentado organizarse y registrarse. La ley prohíbe la formación de partidos políticos de carácter étnico y las coaliciones entre partidos; sin embargo, seis grupos de la oposición continuaron siendo parte de una coalición, que durante el año se alió con el partido dominante. Los miembros del partido de la oposición se quejaron de que sus reuniones fueron interrumpidas o vigiladas.

c. Libertad de Religión

La constitución y la ley prevén libertad de religión, y el gobierno generalmente respeta este derecho; sin embargo, los líderes religiosos evitaron criticar al gobierno en sus sermones, y los oficiales del gobierno llegaron a vigilar algunas celebraciones religiosas.

Debido a las raíces tradicionales y a la influencia histórica en la vida social y cultural, la ley da preferencia oficial a la Iglesia católica y a la Iglesia Reformada de Guinea Ecuatorial. La confesión católica es normalmente parte de cualquier función o día festivo nacional. Las escuelas católicas reciben, por parte del estado, las mismas ventajas que las escuelas públicas.

Una organización religiosa para poder operar debe registrarse formalmente en el ministerio de justicia, culto e instituciones penitenciarias. No hubo informes durante el año de que el gobierno rechazara registrar a un grupo religioso. La aprobación puede tomar varios años, debido sobre todo a la lentitud burocrática más que a cuestiones políticas; sin embargo, la carencia de los procedimientos

claros de registro podía ser utilizada contra una iglesia cuando a una figura política no le gustaba su principal dirigente o algún miembro de esta congregación.

Las religiones africanas tradicionales eran practicadas en privado, incluso por muchos que profesaban otras religiones.

El gobierno continuó restringiendo al clero, particularmente con respecto a criticar al gobierno. Representantes religiosos informaron que practicaban la auto-censura. El gobierno requería permiso para cualquier actividad religiosa que no fuera celebración dentro la iglesia, pero este requisito no aparecía obstaculizar a grupos religiosos organizados.

La religión, generalmente pero no exclusivamente católica, era una asignatura en escuelas públicas y en escuelas parroquiales.

Abusos y discriminación Social

De vez en cuando, los no católicos se enfrentaron a discriminaciones en la inscripción en las escuelas o en la expresión de sus creencias en las clases de religión.

La comunidad judía era muy pequeña, y no hubo informes de actos antisemíticos.

Para una discusión más detallada, vea el Informe - Internacional de la Libertad de Religión de 2006 [EEUU Departamento de Estado].

d. Libertad de movimiento dentro del país, viajes al extranjero, extranjera, emigración, y repatriación

La constitución y la ley prevén los estos derechos; sin embargo, el gobierno los limita en la práctica. La policía en las barreras chequea de forma rutinaria a los ciudadanos, los acosa y los extorsiona; sin embargo, la frecuencia de estos actos se redujo respecto a años anteriores. El gobierno justificó las barreras alegando que eran para prevenir la inmigración ilegal, actividades posibles de mercenarios, o potenciales golpes de estado. Sin embargo, las barreras restringieron eficazmente la libertad de movimiento de los miembros de la oposición. Policías y soldados continuaron acosando extranjeros,

principalmente porque los veían como más ricos que la mayoría de los ciudadanos (véase la sección 1.c.).

La policía acosó e intimidó a miembros del grupo étnico Bubi de la isla de Bioko. Oficiales de la seguridad apalearon y tirotearon a bubis por no entregar sus productos agrícolas, suficiente dinero o incluso sus tierras. En la isla de Bioko, los militares eran vistos generalmente como tropas de ocupación que restringen la libre circulación de los nativos de la tierra.

La ley prohíbe exilios forzosos, internos o externos; sin embargo, el gobierno no respetó esto en la práctica. Por ejemplo, el 5 de junio, el gobierno forzó Weja Chicampo a exiliarse en el extranjero (véase la sección 1.d.). Según se informa, en septiembre el gobierno confinó al exilio interior al ex general Agustín Ndong Ona. Algunas personas han huido del país por razones políticas.

Supuestamente, los miembros del gobierno y del parlamento requerían la autorización de sus superiores para poder viajar al extranjero. Esta práctica servía como un medio eficaz para controlar a los miembros del partido dominante y a los de los partidos aliados.

Agentes de seguridad del gobierno que trabajan en otros países, informaban de los movimientos de los viajeros guineanos en estos países.

Protección de refugiados

La ley prevé la concesión del estatuto de asilado y refugiado de acuerdo con la convención de la ONU de 1951 referente al estatuto de refugiados y al protocolo de 1967; sin embargo, el gobierno no ha establecido un sistema para proporcionar protección a los refugiados. En la práctica, el gobierno proporcionó una cierta protección contra el *refoulement*, la devolución forzada de personas a un país en el que tienen miedo de persecución. El gobierno también proporcionó protección temporal a individuos que pueden no calificar como refugiados bajo la convención 1951 y el protocolo 1967.

No ha habido casos recientes de cooperación entre el gobierno y ACNUR u otras organizaciones humanitarias en

asistir a refugiados y a solicitantes de asilo. No existe una oficina local de ACNUR.

Se informó que la policía sigue acosando a solicitantes de asilo, a menudo piden sobornos.

Artículo 3, Respeto por los derechos políticos; el derecho de los ciudadanos a cambio de gobierno

La constitución y la ley proporcionan a los ciudadanos el derecho a cambiar de forma pacífica su gobierno; sin embargo, en la práctica los ciudadanos no podían cambiar libremente la ley y los dirigentes que los gobiernan.

Elecciones y participación política

No ha habido elecciones libres, justas, y transparentes desde la independencia.

El país obtuvo la independencia de España en 1968, y en 1979 los militares, conducidos por el Teniente Coronel Teodoro Obiang Nguema Mbasago, derrocó el primer presidente, después de años de un gobierno cruel y desastroso. En 1989, como candidato único, Obiang fue elegido para un término de siete años y ha permanecido en el poder desde entonces. En 1986 Obiang fundó el PDGE, que fue durante años el único partido legal, que consiguió una dominación abrumadora antes de que otros partidos fueran permitidos. El partido gobierna con la concurrencia de una alianza oligárquica basada en alianzas clánicas y étnicas. No hay una limitación de mandatos presidenciales.

Ser miembro del partido dominante constituía, generalmente, una gran ventaja para conseguir empleo y ascender, en el sector público y privado. Ser miembro de otra organización política, según se informó, es argumento para ser despedido de cualquier posición, del sector público o privado. Los políticos de la oposición demandaron a menudo haber sido despedidos de sus trabajos después de haberse afiliado a otros grupos políticos, sin posibilidad de compensación legal.

La comunidad internacional criticó las elecciones parlamentarias más recientes, las del 2004, como seriamente defectuosas. Los candidatos de la oposición estaban

sujetos al hostigamiento, a la detención arbitraria, se les restringían los movimientos y el acceso a los medios de comunicación era desigual. Todos los acontecimientos del estado fueron publicitados en conexión con el PDGE. Debido a la recolección obligatoria de deudas y de otras contribuciones (según se informa incluyendo donaciones de otros gobiernos), el partido dominante disfrutaba de una financiación enormemente desproporcionada, incluyendo los donativos de votantes potenciales.

Los miembros de PDGE fueron de puerta en puerta antes de las elecciones, amenazando, acosando y deteniendo arbitrariamente a la oposición. El día de la votación, hubo varios informes de intimidación y otras irregularidades. Amedrentaron a los votantes de no votar en secreto, las urnas fueron abiertas ilegalmente y los representantes del partido dominante incluyeron, en adición a sus propios, según se informa, votos de difuntos y de menores. Las fuerzas de seguridad intimidaron a los votantes en las cabinas de votación. Hubo pocos observadores independientes en áreas rurales, y se evidenciaron discrepancias entre el recuento de votos que se hizo en las propias áreas locales y el que se publicó más tarde en los resultados definitivos. Por ejemplo, aunque los observadores internacionales estimaban que el partido de la oposición CPDS se hizo con el 12 por ciento de los votos, los resultados finales no mostraban eso, y el partido predominante ofreció a CPDS solamente dos escaños de los 100 que hay en el parlamento. Algunos escaños fueron ofrecidos a los partidos de la oposición que habían prometido cooperar con el PDGE.

El presidente acumulaba muchos poderes como jefe de estado, comandante de las fuerzas armadas, y fundador y jefe del partido dominante. En general, las posiciones claves del gobierno estaban restringidas a miembros del partido dominante y a los de la "oposición leal". Puesto que el partido dominante dominaba de forma aplastante las comisiones establecidas para examinar las prácticas electorales y para recomendar reformas, no se realizó cambio alguno. El ministro del interior actuaba como presidente de la comisión electoral nacional. No existió una comisión electoral independiente.

El proceso para registrar un partido político no era transparente. Algunos partidos políticos, populares antes

de la ley de 1992 que fijo el procedimiento de legalización de los partidos, permanecieron prohibidos, generalmente bajo de la excusa de "fomentar el terrorismo" o de intentar derrocar el gobierno.

Había 13 partidos políticos registrados, 12 de los cuales el gobierno llamaba "partidos de la oposición"; sin embargo, seis de éstos se alinearon con el PDGE, y otros (por ejemplo el CPDS) eran llamados oposición "radical", lo que venía a significar que se confrontaban y podrían votar contra los deseos del presidente. El gobierno afirmaba que estos supuestos partidos de oposición eran el ejemplo de que existía una democracia multipartidista en el país; sin embargo, el gobierno prohibió debates verdaderos entre los partidos y la crítica pública de las políticas del gobierno y las prácticas, excepto dentro del parlamento.

Los miembros del gobierno se referían de forma rutinaria a cualquiera de los partidos políticos no legalizados como "terroristas". El gobierno en general imposibilitó el acceso de los partidos políticos de oposición a los medios de comunicación y por regla general solo se refería a ellos en términos negativos cuando de radiodefusión?. El gobierno sobornó, según se informa, a miembros de la oposición para afiliarse al PDGE; si rechazaban, se encontraban sin trabajo y que a los miembros de sus familias se les negaban las oportunidades de empleo.

De 100 miembros en el parlamento, había 20 mujeres, y seis mujeres, incluyendo dos ministros (de trabajo y promoción de la mujer), en el gabinete del ejecutivo.

En agosto se nombró un nuevo gobierno dirigido por un nuevo primer ministro que no era de la etnia bubi, como había sido durante décadas la tradición. Se crearon carteras y subcarteras adicionales, alcanzando el número de miembros del gobierno la cifra de 59. Un total de 49 personas nombradas eran del mayoritario grupo étnico Fang, y por lo menos 40 eran de dos de las siete provincias que componen el país. Casi 30 miembros eran de la provincia natal del presidente.

Corrupción y transparencia del gobierno

La corrupción oficial en todas las ramas de gobierno seguía siendo un problema serio, pero en agosto el presidente designó un nuevo primer ministro que declaró que la

erradicación de la corrupción era su objetivo principal, y el tema recibió una mayor atención pública.

La abundancia de los nuevos fondos provenientes del petróleo se había convertido en un imán para muchas oportunidades financieras que buscaban, incluyendo medios corruptos, una parte de los ingresos. Los individuos ricos podían comprar las licencias requeridas para operar económicamente y tenían influencia para desbancar a los competidores.

Se les dijo en el pasado a los militares y al personal de la seguridad que ganaban salarios bajos, debían "procurarse su propio aumento", lo que implica una aprobación gubernamental para que pudieran exigir sobornos.

Muchos oficiales del gobierno han sido despedidos por corrupción, pero la opinión de muchos es que han sido los chivos expiatorios de altos y ex altos oficiales del gobierno. Los oficiales del gobierno deben, por ley, declarar su riqueza, pero no hubo informes de que hicieran tal cosa. A los funcionarios no se les exigían unos requisitos para no hacer negocios en sectores supervisados por el órgano oficial en el que trabajan. Cuando, mediante presión internacional, se intentó evitar que los funcionarios tuvieran negocios en las áreas supervisadas por sus departamentos, todo lo que hizo fue de cara a la galería; otro miembro de la familia o un asociado nominalmente asumió el control o se formó una empresa que aparentemente no estaba relacionada con el oficial.

En septiembre el primer ministro creó una línea telefónica, supuestamente para ser utilizadas por las compañías petroleras en caso de que tuvieran evidencias de corrupción o se sintieran inducidos en cuestiones que juzgaban como corrupción. Se informó que la línea fue utilizada por lo menos dos veces pero no trascendió que se llevara investigación alguna respecto a estos supuestos casos de prácticas ilegales.

El gobierno cesó a algunos oficiales por hacer un uso inapropiado de la confianza depositada en ellos (corrupción) pero ninguno fue juzgado y algunos fueron incluso reubicados en otras posiciones del gobierno.

En el 2004 una investigación del parlamento de un país extranjero estipuló que por lo menos \$35 millones (17.5 mil

millones francos del CFA) de ingresos provenientes de las compañías petroleras extranjeras habían apropiados indebidamente por el presidente, su familia, y otros altos oficiales del gobierno en años anteriores. Los investigadores concluyeron que, en muchos casos, el dinero entró directamente en las cuentas bancarias extranjeras controladas por el presidente y de gente muy próxima a él.

El gobierno, en un esfuerzo por refutar las alegaciones, presentó un informe. El gobierno sostuvo que las cuentas extranjeras fueron pensadas para resolver "necesidades en el país," a pesar de la naturaleza privada de las cuentas, y que se crearon en ganancia del interés "de las generaciones futuras," algo que los fondos depositados en el Banco de los Estados del África Central no hacían. El gobierno intentó detallar que el destino de centenares de millones de dólares (miles de millones de francos CFA) había sido gastado en construcción de proyectos importantes que se estaban llevando a cabo en el país, y que los fondos de los ingresos petroleros extraídos por el presidente de estas cuentas se dedicaban a pagar proyectos. Cuando esas cuentas extranjeras fueron cerradas a finales de 2004, la mayor parte de los fondos fueron ingresados en el Banco de los Estados del África Central.

En el 2005 el gobierno expresó su interés por adherirse a la Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas, una iniciativa multinacional de la sociedad civil que alienta la transparencia y la responsabilidad en las industrias extractivas. Sin embargo, se hicieron pocos progresos para reunir los requisitos de adhesión porque no se aprobó ninguna de las regulaciones que promueve la iniciativa.

La ley no dispone que la información esté alance del público; tanto nacionales como extranjeros, incluyendo medios de comunicación extranjeros, generalmente no tenían acceso a la información del gobierno. La desorganización y mal mantenimiento de los archivos y la falta de bibliotecas públicas limitaban igualmente el acceso.

Artículo 4: Actitud del Gobierno respecto a las investigaciones internacionales y no gubernamentales de presuntas violaciones de derechos humanos.

No existían ONGs locales de derechos humanos. La ley restringe las ONGs e identifica las áreas específicas en las cuales pueden funcionar; los derechos humanos fueron añadidos a la lista en enero de 2005; sin embargo, habiendo sido prohibidas durante mucho tiempo, no existía ninguna ONG de derechos humanos.

La principal organización con una cierta responsabilidad en el ámbito de los derechos humanos, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH), estaba controlada por el gobierno y padecía serios problemas de financiación, de personal y limitaciones institucionales. No investigó quejas de derechos humanos ni guardó estadísticas sobre estas. El presidente designaba a miembros del CNDH.

El Centro para los Derechos Humanos y la Democracia, aunque organizado como entidad cuasi independiente, no disponía de ninguna fuente independiente de financiación ni demás autoridad que la que le concedía el gobierno. Recibió un apoyo mínimo y a finales del 2005 perdió su local de trabajo y volvió a ubicarse en el recinto del ministerio de justicia. Su papel había sido sobre todo de defensa y sensibilización a público, no de investigación o divulgación de violaciones de derechos humanos.

Ni el CNDH ni el Centro para los Derechos Humanos y la Democracia eran considerados eficaces. Sus mandatos no estaban claros, salvo que el centro preparaba el informe anual para el alto comisario de la O.N.U. para los derechos humanos que se presenta en Ginebra y que organizó durante el año numerosos talleres sobre derechos humanos y tráfico de personas.

Durante la reorganización del gobierno en agosto, el gobierno elevó la cartera de los derechos humanos y la puso bajo la responsabilidad del primer vice primer ministro, pero a finales del año todavía no había impacto alguno de este desplazamiento de la cartera.

Durante el año el gobierno colaboró con el CICR y otras organizaciones para formar, a nivel local y regional, a personal de la seguridad, a oficiales del gobierno, a estudiantes, y a otros sobre temas de derechos humanos. En varias ocasiones durante el año, la UNICEF, el PNUD, el CICR, el Fondo Europeo de Desarrollo, y las organizaciones privadas contratadas realizaron actividades en las áreas de

protección de los derechos humanos y formación sobre los derechos humanos.

No hay ONGs internacionales de derechos humanos residentes en el país. Había alegaciones de que representantes de ONGs (de CRS, organización de asistenciales Católicas; Periodistas sin Fronteras; y el Centro para el Desarrollo Rural) que visitaban Malabo tenían los movimientos, teléfonos y faxes controlados.

Artículo 5: Discriminación, abusos sociales y tráfico de personas.

La constitución y la ley prohíben la discriminación basada en la raza, el género, la religión, la minusvalía, la lengua, o el estado social; sin embargo, el gobierno no hizo cumplir estas provisiones con eficacia. La violencia y la discriminación contra las mujeres, el tráfico de personas, la discriminación contra minorías étnicas, y la discriminación contra víctimas de HIV/AIDS eran problemas en el país.

Durante el año el gobierno efectuó campañas públicas para combatir el trabajo infantil y la discriminación y violencia contra las mujeres y las personas con HIV/AIDS. La discriminación más evidente era la que tenía que ver con la pertenencia étnica y la afiliación política.

Mujeres

La violencia contra las mujeres, incluyendo el abuso del esposo, es ilegal, pero el gobierno no hace cumplir la ley con eficacia. La opinión tradicional de que las mujeres eran vendidas por sus familiares a los hombres y que, por ende eran, por todos los medios, propiedad de los maridos, los cuales llegaban a disponer de sus vidas, era generalizada. El apaleamiento público de esposas es ilegal; sin embargo, la violencia en el hogar era tolerada generalmente. La policía y la judicatura eran renuentes procesar casos domésticos de violencia; algún policía y funcionarios judiciales indicaron que la violencia de género se debe resolver en casa, no debe ser perseguida por el gobierno. El gobierno no tenía una línea telefónica para atender casos de violencia de género, refugio, u otros servicios para las víctimas de la violencia doméstica. El número de casos procesados durante el año era desconocido;

sin embargo, el gobierno no procesó generalmente a los autores de la violencia doméstica, y tal violencia, particularmente los apaleamientos, era común.

La violación es ilegal, pero la violación de la esposa no se especifica en la ley. El gobierno no hizo cumplir la ley con eficacia. Divulgar haber sido violada era una vergüenza para las familias implicadas. El número de casos procesados durante el año no era sabido.

La prostitución es ilegal pero es tolerada generalmente. La pobreza y la demanda de mujeres producida por el aumento del número trabajadores extranjeros residentes la fomentan. La respuesta del gobierno fue cerrar algunos bares (que abrieron de nuevo algunos días más tarde). La policía detuvo de vez en cuando a prostitutas, abusando y haciéndolas víctimas de la extorsión; no arrestaron a los patrones.

El tráfico de personas posiblemente estaba aumentado (véase la sección 5, Tráfico de Personas).

El acoso sexual no era ilegal, y su incidencia en la sociedad era desconocido.

La ley prevé derechos iguales para mujeres y hombres, incluyendo las derechas bajo ley de la familia, ley de la propiedad, y en el sistema judicial; sin embargo, los derechos de las mujeres fueron limitados en la práctica. Porque las mujeres se convierten en miembros de las familias de sus maridos después de la unión, no había derechos a heredar acordados para ellas. La tradición también dictaba que si la familia de una muchacha aceptaba la dote de un hombre, ella tenía que casarse con ese hombre, sin tener en cuenta sus deseos; si una unión se disolvía, el marido también recibía automáticamente la custodia de todos los niños nacidos durante la unión.

Un fondo de desarrollo extranjero, como parte de su programa para apoyar a sociedad civil, dedicó uno de sus foros a los derechos de mujeres. Las cuestiones que dominaron el foro fueron la poliginia y las actitudes tradicionales que hacen vulnerables a las mujeres. La poliginia, que era extensa (aunque no tenía ninguna base jurídica), contribuyó a hacer de las mujeres unas ciudadanas de segunda clase y limitaba sus oportunidades educativas.

El ministerio de la promoción de la mujer era el responsable de los asuntos de las mujeres.

La mujer estaba confinada a los roles tradicionales, generalmente agricultura. Las mujeres sufrían la discriminación económica en el acceso al empleo, al crédito, cobraban menos que los hombres por el mismo trabajo, y en la propiedad de un negocio o gerencia. A pesar de esto, había casos de mujeres empresarias triunfadoras.

Niños

El gobierno dedicó poco atención a los derechos o al bienestar de los niños y tenía pocas políticas en esta área, aunque durante el año patrocinó varios seminarios, programas en los medios de comunicación, y comunicaciones sobre la convención sobre los derechos del niño. En el 2004 el parlamento aprobó una ley contra el tráfico de personas, centrada casi exclusivamente en niños traficados (véase la sección 5, tráfico); sin embargo, con excepción de prohibiciones contra el trabajo infantil, no hay incluidas otras provisiones para el bienestar de los niños.

Por ley la educación es obligatoria, gratuita, y universal a través de la escuela primaria, pero la ley no se hace cumplir. Los honorarios y requisitos tales como uniformes hacen difícil que muchas familias puedan matricular a sus hijos. Las familias esperaban generalmente que los hijos completaran los siete años de educación secundaria o que concluyeran unos estudios vocacionales después de la educación primaria. Para muchas muchachas, el embarazo o la necesidad de ayudar económicamente en casa hacen que no puedan ni completar la primaria. Las mujeres lograron generalmente solamente una quinta parte del nivel de educación de los hombres. Según la UNICEF, de 1992 al 2002 la red de educación primaria estaba atendida por un 60 por ciento de muchachos y un 61 por ciento de muchachas, y de 1997 a 2000, el cociente de la inscripción de la escuela secundaria era 43 por ciento para los muchachos y 19 por ciento para las muchachas [demostrando la reducción en la proporción de niñas en la escuela secundaria].

Los profesores eran personas asignadas a veces por razones políticas que por capacidad.

El gobierno continuó cooperando con un gobierno extranjero para proporcionar libros de texto a las escuelas.

En septiembre, en cooperación con una compañía de la industria extractiva, el gobierno comenzó con los programas de formación de profesores; identificó una ONG extranjera para ejecutar los programas, desplazó expertos a Bata y a Malabo, e importó los materiales educativos. Según las condiciones del acuerdo, cada parte contribuía con \$20 millones (10 mil millones francos CFA) al programa por un período de cinco años.

El programa de Fondo Social del gobierno, en el que trabaja con un coordinador oficial extranjero, también comenzó a establecer procedimientos de funcionamiento, hizo una valoración inicial, y se designaron las contrapartes en los ministerios del gobierno para coordinar proyectos prioritarios para abordar problemas en la educación, el cuidado médico, la protección del niño, el agua, y saneamiento.

Los niños tenían una salud muy pobre y sus índices de mortalidad eran elevados. El gobierno proporcionó poco cuidado médico, pero los muchachos y las muchachas tenían igualdad de acceso a la que fue ofrecida. El tratamiento para la malaria, la causa de mortalidad infantil más importante, supuestamente era gratis para mujeres embarazadas y niños hasta los cinco años.

El abuso de menores de edad es ilegal; sin embargo, el gobierno no hace cumplir la ley con eficacia, y el abuso de menores sucede. El castigo físico es un método culturalmente aceptado de disciplina. No se divulgó ningunos procesamientos por un abuso de menores.

Los niños eran utilizados en demostraciones de apoyo al presidente y sus políticas. El 1 de diciembre, algunos estudiantes se perturbaron en Malabo después de horas de caminar para participar en una marcha por el día mundial de VIH/SIDA, un accidente de carretera mató, por los menos, a un niño y hirió de gravedad a unos cuantos más. Los oficiales del gobierno atribuyeron la perturbación de los niños parcialmente a los profesores, los padres, los directores que eran "muy flojos en la disciplina". Implícitamente fomentaron la reinstitución de castigos físicos.

La prostitución infantil podría existir, pero no había estadísticas disponibles (véase la sección 6.d.).

El trabajo infantil por ley se penaliza con una multa a partir del \$100 a \$500 (50.000 a 250.000 francos del CFA); sin embargo, el trabajo infantil era una práctica amplia, generalmente en la agricultura, en la venta callejera o en los mercados, y en el trabajo doméstico. Su grado era desconocido. (véase la sección 6.d.).

El tráfico de personas se penaliza con hasta 15 años de prisión y una multa de aproximadamente \$100.000 (50 millones de francos del CFA); sin embargo, el tráfico de niños eran una práctica amplia en el país, era un problema cada vez mayor (véase la sección 5, Tráfico de Personas).

A diferencia de años anteriores, no hubo niños sin hogar en el país.

El gobierno, con el Plan Nacional de Acción de Lucha contra el Tráfico de Personas y Trabajo infantil, financió un programa para concienciar al público contra estas prácticas, para asistir a víctimas, y para castigar a delincuentes. Sin embargo, la mayoría de los programas de formación para investigadores y trabajadores del sector no habían comenzado a finales del año, puesto que la sensibilización y la educación en el tema todavía continuaban. El gobierno llegó en un acuerdo con Gabón y Camerún para analizar el tráfico trans-fronterizo de personas, y en julio firmó un acuerdo multilateral de cooperación para combatir el tráfico de personas, especialmente mujeres y niños, en África del oeste y central.

Trata de personas

La ley prohíbe el tráfico de personas; sin embargo, fueron traficadas personas a través del país y hacia el país. Las penas por trata personas con fines de explotación sexual u otro tipo de explotación eran el encarcelamiento de 10 a 15 años y una multa de no inferior a aproximadamente unos \$100.000 (50 millones de francos del CFA).

El gobierno no investigó activamente los casos de trata de personas. El Ministerio de Justicia es el responsable de

combatir la trata de personas, y el ministro de justicia es el presidente del comité interinstitucional sobre tráfico ilegal de migrantes y trata de personas.

No se disponía de datos fiables sobre el número de personas traficadas, pero evidencias anecdóticas apuntan a que el número era pequeño. El país servía de destino y tránsito de las personas traficadas. Aunque menos frecuente que la trata por tránsito, la trata hacía el país, según se informa, era un problema. Se informó que, niños, principalmente de Benin y Nigeria, eran traficados para los sectores comerciales del mercado de Malabo y Bata, a menudo sin paga y privados de libertad. El país fue un punto de destino y una ruta de tránsito de muchachas y muchachos traficados, sobre todo de Camerún, de Benin, y de Nigeria. Se informó que fueron traficadas mujeres, sobre todo a Malabo, con fines de explotación sexual. Según informes, algunas nigerianas fueron traficadas para ser enviadas a España para trabajar allí en la prostitución.

El gobierno, en colaboración con la UNICEF y gobiernos extranjeros, implementó la primera fase de un plan de acción nacional para evitar la trata, castigar a los delincuentes y proteger a las víctimas. El plan implicaba a 11 ministerios, comunidades religiosas y organizaciones no gubernamentales e internacionales. Durante el año el gobierno condujo al respecto cuatro seminarios con amplia participación. Los anuncios públicos respecto a problema del tráfico de personas fueron ampliamente diseminados.

Había un informe sin confirmar de un oficial del gobierno implicado en la trata de un bebé nigeriano, según se informa, para una adopción ilegal. Esto fue resuelto de forma privada entre los dos países, y se desconoce que se tomara acción alguna contra los implicados. Los oficiales de seguridad de niveles bajas, tales como los agentes de fronteras y los de inmigración, eran sospechosos de facilitar la trata a cambio de sobornos.

De forma general, los traficantes cruzaban la frontera con documentación falsa y aseverando que los niños eran suyos. Según se informa, estos niños trabajaban sin salario y no asistían a la escuela. Las redes criminales organizadas de Benin y posiblemente de Nigeria presumiblemente estaban implicadas en trata de personas hacia el país y a través del país. Los barcos de pesca también fueron empleados

probablemente para transportar a niños con el fin de evitar procedimientos de entrada formales.

Durante el año otros gobiernos no solicitaron la cooperación del gobierno para cooperar en la investigación y el procesamiento de casos de tráfico. Las autoridades no animaron a las víctimas a denunciar a los traficantes. Durante el año no hubo informes de procesamientos al amparo de la ley aprobada en el 2004.

El gobierno no proporcionó protección o ayuda a las víctimas o a los testigos. Se esperaba que las embajadas de los países de origen de las víctimas, si estaban en el país, cuidarán de las víctimas hasta que estas fueran repatriadas a sus países de origen. No había ONGs en el país para asistir a víctimas. Las únicas víctimas identificadas fueron repatriadas.

Personas con discapacidades

La ley no brinda protección a las personas discapacitadas contra la discriminación en el empleo, educación o la prestación de otros servicios estatales. Los servicios educativos para personas física o mentalmente discapacitadas eran mínimos. Por lo general, si no en todos los casos, estos servicios son proporcionados por las iglesias o las ONG.

No existe un cuidado o tratamiento institucional para los mentalmente enfermos, un problema pequeño pero cada vez más en aumento.

La ley no exige que se coloquen rampas especiales para el acceso de personas discapacitadas a los edificios y hay discriminación social a estas personas.

El ministerio de educación y el de sanidad son los responsables principales de proteger los derechos de las personas con discapacidades. Algunos anuncios sobre la protección de los derechos de los discapacitados eran difundidos.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

La discriminación contra las minorías étnicas o raciales no es legal, y el gobierno no limita abiertamente la participación de las minorías en la política; sin embargo,

persiste la casi monopolización del poder político y económico por parte del grupo étnico Fang, y de forma particular los subclanes de Mongomo (véase la sección 3).

De 59 miembros del gobierno, 49 eran Fang, 7 eran Bubi, 2 eran Bisios y solo uno era Ndowe.

Las tensiones existían, en parte, porque el grupo dominante controlaba la mayoría de las propiedades, lo que hace que sean más prósperos y previene la competencia económica de las minorías. Las minorías se sentían discriminadas en las expropiaciones de sus propiedades, en las indemnizaciones por sus hogares demolidos o tierras confiscadas, en el acceso al crédito, en la competencia por las becas, en la obtención y conservación de puestos de trabajo.

El número de residentes de Nigeria, de Ghana, de Camerún, de Malí, de Togo, y de otros países africanos creció, a pesar de la detención del aumento de las detenciones de la policía de personas que viajaban sin visado o no tenían permisos válidos de residencia. Los extranjeros estaban sujetos al acoso y a la extorsión por miembros de la fuerzas de seguridad.

Las diferencias entre los subclanes fang, especialmente el resentimiento por la dominación política de subclan de Mongomo, eran también fuentes de tensión política. En la práctica algunos miembros de minorías étnicas, particularmente del grupo étnico de bubi, hicieron frente a la discriminación, especialmente cuando no eran miembros del partido dominante.

Otros abusos sociales y discriminación.

La discriminación social contra homosexuales era fuerte, y el gobierno no hacía ningún esfuerzo de combatirlo.

Las personas con HIV/AIDS continuaron siendo víctimas de la discriminación social y a menudo mantuvieron sus enfermedades ocultas. Las campañas de radio y las declaraciones públicas que abogaban por la no discriminación hacia personas con HIV/AIDS eran frecuentes. El gobierno promulgó un decreto que prevé la prueba libre y el tratamiento de HIV/AIDS.

Artículo 6: Derechos del trabajador.

a. El derecho a la asociación

La ley permite que los trabajadores constituyan sindicatos y se afilien a sindicatos de su elección sin previa autorización ni requisitos excesivos; no obstante, en la práctica, pone obstáculos al deseo de asociarse. La Organización Sindical de Pequeños Agricultores (OSPA) fue el único sindicato obrero legalmente reconocido del país. Según la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, las autoridades se han negado sistemáticamente a registrar a la Organización Sindical de Guinea Ecuatorial, la cual se ha visto obligada a llevar a cabo sus actividades en secreto. La ley estipula que un sindicato debe tener como mínimo 50 miembros de un lugar de trabajo específico para registrarse; de hecho, esta norma impedía la constitución de un sindicato. Las autoridades se negaban a legalizar la organización sindical del sector público, los Servicios Sindicalizados Independientes, a pesar de que había cumplido los requisitos de la ley.

Según representantes regionales de la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno continuó influenciando el empleo en todos los sectores. Los requisitos para utilizar las agencias del empleo y de la seguridad estaban controlados por los parientes del presidente.

No había ley que prohibiera la discriminación anti-sindicato. No obstante, a diferencia del 2005, no hubo informes de trabajadores que intentaran formar sindicatos, o que la policía los hubiera visitado a sus casas para amenazarlos si persistían.

b. El derecho a sindicarse y establecer convenios colectivos

La ley permite que las organizaciones sindicales lleven a cabo sus actividades sin injerencia, pero en la práctica, el gobierno no protegía este derecho. Éste ponía obstáculos prácticos a los grupos que deseaban ponerse en huelga. En ocasiones raras los trabajadores se juntaron en protestas o "huelgas temporales intermitentes" (ralentizar el ritmo del trabajo y planificar ausencias). En una ocasión los trabajadores protestaron por las condiciones de trabajo y la escasa paga en una obra en el puerto de Malabo, llegando a amenazar a un contratista extranjero. El primer ministro intervino y prometió tomar acciones en los puntos en los

que se quejaban los trabajadores si estos volvían a sus puestos.

No había informes de negociación colectiva de ningún grupo; sin embargo, el ministerio de trabajo en ocasiones medió en conflictos laborales. Los trabajadores despedidos, por ejemplo, podrían apelar al ministerio, primero a través de su delegado regional; sin embargo, había poca confianza en la imparcialidad del sistema. Los ciudadanos tenían el derecho de apelar las decisiones que el ministerio de trabajo había tomado a una comisión permanente especial del parlamento establecida para oír las quejas del ciudadano con respecto a decisiones de cualquier agencia de estatal. El gobierno y los empleadores fijaron salarios con poca o nula participación de los trabajadores.

Los trabajadores creían que acciones tales como huelgas darían lugar a la pérdida de sus trabajos y dañarían posiblemente a sí mismos o a sus familias.

No hay zonas de procesamiento de exportaciones.

c. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe el trabajo forzoso u obligado y la esclavitud, incluyendo de menores; pero hubo informes de que tales prácticas ocurrieron (véase las secciones 5 y 6.d.). A diferencia de años anteriores, no hubo informes de que se forzaran a los detenidos y a los criminales condenados a realizar trabajos en el exterior, ni tampoco para oficiales del gobierno, sin remuneración (véase la sección 1.c.).

En 2004, el Gobierno exigió por primera vez el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de trabajo forzoso y condenó a una mujer beninesa por obligar a una niña de 14 años de la misma nacionalidad a trabajar para ella por un determinado período de tiempo. Se ordenó a la mujer pagar el salario atrasado, más una multa, y se la condenó a cumplir una pena de prisión.

La ley prohíbe el trabajo forzoso u obligado de menores; no obstante, hubo informes de que tal práctica se lleva a cabo (véase el artículo 5).

d. Prohibición del trabajo de menores y edad mínima para trabajar

No hay leyes integrales o políticas para proteger a niños contra la explotación en el lugar de trabajo, y el gobierno no implementó con eficacia las pocas que existían. La ley del 2004 contra el tráfico de las personas establece que el culpable de forzar ilegalmente a un menor a trabajar debe ser castigado con una multa aproximadamente de entre \$100 a \$500 (50.000 a 250.000 francos CFA). La radio informó que algunos padres se habían visto obligados a pagar esas multas como ejemplo.

La edad mínima legal para el empleo es de 14 años, pero el gobierno no hizo cumplir esta ley, y el trabajo de menores era común. En la mayoría de los casos los niños también iban a la escuela, las muchachas iban a la escuela primaria y los chicos estaban en el nivel medio. En junio del 2005 el gobierno publicó un decreto que prohibía el empleo de menores en la venta callejera, lavado de coches, o en barras y restaurantes, pero esta ley se hacía cumplir raramente. Según un estudio sobre trabajo infantil del 2001 llevado por la UNICEF, la información más reciente disponible, el trabajo de menores existía sobre todo en forma de menores que trabajaban en tareas agrícolas y vendedores callejeros de negocios familiares. Durante el año hubo informes no confirmados que no familiares utilizaban a menores extranjeros en la venta en el mercado y que no tenían acceso a la educación.

El ministerio del trabajo era el responsable de hacer cumplir las leyes sobre trabajo de menores; sin embargo, no lo hizo con eficacia.

e. Condiciones aceptables del trabajo

La aplicación de leyes de trabajo y de acuerdos de trabajo internacionales ratificados no era eficaz, lo que empobrecía las condiciones laborales. Las medidas de seguridad, por ejemplo, no se hacían cumplir. La mayoría de las compañías petroleras, por otra parte, excedieron los estándares internacionales de seguridad.

Por ley los empleadores deben pagar el salario mínimo fijado por el gobierno. Los salarios mínimos fueron fijados para todos los sectores de la economía formal; sin embargo, el salario mínimo no proporcionaba un estándar decente de vida para un trabajador y su familia en Malabo o Bata. En

el resto del país, el salario mínimo proporcionaba una renta como mínimo adecuada. Muchas compañías de sectores formales pagaron más de lo que estipulaba la ley de salario mínimo, pero no cubrían a todos los trabajadores (granjeros, etc.). Por ley, los trabajadores de la industria de hidrocarburos recibían una remuneración muchas veces superior a la de los otros sectores, lo que creaba inflación y perjudicaba a los que trabajan en otros sectores. El ministerio del trabajo es responsable de hacer cumplir el salario mínimo, pero debido al alto desempleo, los trabajadores, en cualquier trabajo, raramente se quejaban a las autoridades por las violaciones de ley de salarios.

La ley prevé una semana laboral estándar de 35 horas y un período de descanso de 48 horas, que por lo general se observaba en la práctica en la economía formal. Se hacían excepciones por determinados empleos, como los relacionados con el trabajo en el sector petrolero fuera de la costa. Se requiere el pago de horas extras pero de hecho, este requisito no se hacía cumplir.

La ley estipula la protección total de los trabajadores contra los riesgos del oficio; no obstante, el gobierno no hacía cumplir esta disposición en la práctica. El gobierno contaba con un número insuficiente de inspectores de trabajo para supervisar la industria local. La ley no brinda a los trabajadores el derecho a retirarse de situaciones que perjudiquen la salud o la seguridad sin hacer peligrar su empleo ininterrumpido.

Si bien las aportaciones altas al sistema de seguridad social y salud son obligatorias, es poco común que obreros reciban de este sistema asistencia sanitaria, indemnización por accidentes de trabajo o prestaciones de jubilación después de hacer sus aportaciones. Las agencias de empleo que supuestamente debían efectuar los pagos para las prestaciones de la seguridad social de los trabajadores eran bien conocidas por cerrar sin cumplir sus obligaciones.